

pena de destitucion, que ya sufrió, y la de inhabilidad perpétua para obtener algun empleo público, tambien lo es, que de las mismas constancias de la causa se deduce, que existieron circunstancias atenuantes que disminuyen la culpabilidad del encausado, y cuyas circunstancias el legislador ha querido dejar enteramente á la apreciacion del Juez, para que tomándolas en cuenta al tiempo de fallar, mitigue el rigor de la ley, Ley 8, título 31, partida 7. Por lo expuesto, y con fundamento de las leyes citadas, se declara:

Primero: Que es de confirmarse y se confirma la parte de la sentencia de segunda instancia, condenando á D. Tomás Guerrero, á la pena de inhabilidad perpétua para obtener empleo alguno.

Segundo: Se reforma esa sentencia en la parte que le impone dos años de servicio en los talleres de la cárcel, condenándolo á un año de dicho servicio; contado desde el dia de su aprehension.

Tercero: Y lo acordado.

Cuarto: Devuélvase estas actuaciones al Juzgado de su origen por conducto del Tribunal remitente, con copia certificada de esta sentencia para los efectos respectivos; remítase copia igual al Supremo Gobierno para su conocimiento, y archívese el presente Toca, haciéndose saber.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron la 1ª Sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados.)—*S. Llerdo de Tejada.*—*Pedro Oguzon.*—*J. M. Lafregua.*—*Ignacio Ramírez.*—*J. Arzu.*—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

Son copias. México, Marzo veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juez de Distrito de Oaxaca, por Francisco y Jesus Saavedra y Manuel G. Herrera, contra el ciudadano Cefe Político de Tlaxiaco, que al condenarlos á la pena de muerte ha violado en sus personas los artículos 12, 19, 20 y 21 de la Constitucion federal.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez.

El fiscal dice: que por las razones así de hecho como de derecho que adelante pasa á demostrar, es de negarse el amparo que solicita el ciudadano Lic. José Isaac Cañas, en representacion de Manuel Gonzalez Herrera y Francisco Saavedra y Policiano Saavedra, en representacion de su hijo Jesus, sentenciados á muerte por la Jefatura política de Tlaxiaco, como comprendidos en la suprema ley de 9 de Octubre del año próximo pasado, que suspendió algunas garantías individuales á los que cometiesen los delitos de robo en asalto y plagio.

El ciudadano Lic. Cañas, alegó, que están violadas en sus defendidos las garantías que conceden los artículos 19, 20, 21 y 23 de la Constitucion general, y para demostrar que estos son acreedores al amparo, espresa, no estar comprendidos en la ley citada, y por consiguiente, en goce de la proteccion que concede nuestra carta política federal á todo hombre habitante de la República mexicana, supuesto que la misma suspendió las garantías individuales á los saltadores y plagiarios, y á éstos no los considera como tales.

Una vez que se demuestre que Manuel Gonzalez Herrera y socios, son saltadores, el argumento del ciudadano Cañas queda completamente desvanecido, y los procedimientos del ciudadano Cefe Político de Tlaxiaco firmes y valederos, como que se hallan sujetos al derecho.

Los susodichos Gonzalez Herrera y socios, segun consta de las diligencias practicadas por la Jefatura política de Tlaxiaco, formaron una cuadrilla de ladrones, que apelando al disfraz, se introdujeron en la casa de Simona Espinosa, protegidos por la oscuridad de la noche y empleando la fuerza tanto para introducirse en dicha casa, como para consumar el robo, que aun cuando se redujo á un tercio de harina, no fué por la voluntad de éstos, pues consta probado por simple confesion, que con sus puñales amagaron á la Espinosa para que les confesara en dónde tenia guardado su dinero, lo que demuestra evidentemente que su intencion no era consumar un robo de poca cuantía, circunstancia que, á juicio del infrascripto, no debió considerar la Jefatura de Tlaxiaco como atenuante para la aplicacion de la pena, supuesto que la gravedad del delito en el caso presente no lo constituye la mayor ó menor cuantía de lo robado, sino el haberlo hecho en las altas horas de la noche empleando la fuerza para introducirse en la casa de la robada, protegidos por el disfraz y amagándola con sus armas para obligarla á entregar el dinero.

Los espresados Gonzalez Herrera y socios, en lenguaje forense, son y deben considerarse salteadores. La ley no hace distincion alguna de los que asaltan para robar en despoblado ó en poblado, y no haciéndola, inconcuso es que debemos atenernos á la inteligencia que la ley ha dado en estos casos, á las doctrinas de los autores, al sentido gramatical de la palabra salteador, y á la práctica constante de nuestros tribunales.

La ley 14, tít. 18 de la part. 7ª, se espresa así “.....fuerzas endo.....ó si fuese ladrón conocido que manifestamente toviere caminos.....ó si fuesen ladrones que viesen entrado por fuerza en las casas..... La ley 3 del tít. 13 de la misma Part., dice en lo conducente “.....La otra manera de pena, es en razon de oscarmiento ó esta ha lugar contra los omes de mala fama, que roban los caminos ó las casas ó lugares age-

nos como ladrones.....” Esto demuestra hasta la evidencia, que en cuanto á la gravedad del delito, la ley coloca en la misma escala al salteador de caminos, que al que lo es en poblado.

Con respecto á las doctrinas de los Autores puede verse á Gutierrez, en su práctica criminal, tomo 3º, página 83, números 79 y 21: Febrero Mexicano, tomo 7º, pagina 130, que abundando en una misma opinion, supuesto el texto espreso de las leyes citadas y otras reales pragmáticas, convienen en que, no solo son salteadores los que roban en caminos despoblados, sino tambien los que lo hacen en poblado, entrando por fuerza en las casas para robar.

El Diccionario de la Academia española, edicion de 868, dice: “saltear, salir á los caminos para robar á los pasajeros, acometer, invadir, sobrecojer ó sorprender el ánimo con alguna impresion fuerte ó viva,” de manera, que la idea del asalto, la constituye principalmente la sorpresa.

La práctica constante de los Tribunales, ha sido considerar como salteador, no solamente á los que roban en cuadrilla en despoblado, sino á los que lo hacen en poblado. Cuando la ley de 9 de Octubre último no hace distincion alguna, ni espresa en su tenor, que solo quiso comprender á los salteadores de caminos, es de inferir que en ella están comprendidos todos aquellos que cometen un delito de la naturaleza y del que consumaron Gonzalez Herrera y socios.

Por las razones espuestas, este Ministerio concluye pidiendo á V. se sirva declarar en definitiva, que no ampara á los quejosos.

Oaxaca, Enero 23 de 1871.—S. Luegas.

Sentencia del Juez de Distrito.

Oaxaca, Marzo cuatro de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el presente juicio seguido por el ciudadano Lic. José Isaac Cañas como representante legal de Francisco Saavedra, Manuel Gonzalez Herrera, y Jesus Saavedra, vecinos de la Villa de Tlaxiaco, solicitando amparo contra la providencia del ciudadano Gefe Político del Distrito de la misma villa, que condenó á muerte á sus representados, por haberse introducido en una casa de la referida poblacion y haberse robado unas sacos de harina, con fractura de puertas y violacion de unas mujeres que en la casa expresada se hallaban. Visto igualmente el informe del ciudadano Gefe Político, en el que manifiesta, que los quejosos fueron juzgados con arreglo á la ley de 9 de Abril del año anterior, como salteadores y plagiaros. Visto asimismo, el pedimento del ciudadano Promotor en que con fundamento de las leyes 14, tít. 18, partida 7ª, y 8 del tít. 13 de la misma partida, doctrina de los autores Gutierrez y Febrero Mexicano, que opinan en el mismo sentido de las leyes citadas, y ley de 9 de Octubre último, solicita se declare en definitiva, que no se ampare á los quejosos. Considerando: que el ciudadano Gefe Político se vió obligado á avocarse el conocimiento de la causa, por habersele consignado las primeras diligencias practicadas por el ciudadano Juez de 1ª instancia del mismo partido, (fojas 18): que de su mismo informe aparece, que atendiendo á las palabras del sentido de la ley de "salteador," y siguiendo la práctica de los funcionarios encargados de observarla, como ha sucedido en varios puntos de la República, que han sido juzgados, no solo los que roban en los caminos, sino los que asaltan en los poblados: que aunque si bien esta manifestacion pudiera ser cierta, tambien lo es que en el presente caso no es aplicable, atendiendo al sentido que la práctica constante de los tribunales le han dado á la expresada ley de 9 de Abril ya citada: que en vista de que de au-

tos resulta que los quejosos no asaltaron en camino sino en la casa de Simona Espinosa, que se halla situada en la expresada poblacion de Tlaxiaco, no hay duda que la providencia del ciudadano Gefe Político, avocándose el conocimiento de la causa, y juzgando á los quejosos con arreglo á la ley de 9 de Abril ya citada, importa la violacion de las garantías que protejen los artículos 13, 21 y 23 de la Constitucion general. Y en atencion á los artículos 101 y 102 de la misma Constitucion, y todo lo demas que de autos ver convino, la Justicia federal declara, primero: que ampara á Jesus Saavedra, Manuel Gonzalez Herrera y Francisco Saavedra, contra la providencia dictada por el Gefe Político de Tlaxiaco, que los condenó á muerte. Segundo: póngase á los reos á disposicion de su Juez competente, para los efectos á que hubiere lugar. Tercero: hágase saber, publíquese y remítase á la Suprema Corte de Justicia para su revision. El ciudadano Juez de Distrito lo decretó y firmó.—Doy fé.—*Joaquin Mauleon.—Juan Rey.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo quince de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca por el ciudadano Lic. José Isaac Cañas, en representacion de Francisco Saavedra y Manuel Gonzalez Herrera, y por Jesus Saavedra, representado por su padre Feliciano, contra el ciudadano Gefe Político de Tlaxiaco, que condenó á muerte á los quejosos por haber robado en altas horas de la noche en una casa de la misma villa, y forzado á una mujer que habitaba en la misma casa, juzgándolos en virtud del decreto de 9 de Abril del año próximo pasado, expedido contra salteadores y plagiaros.

Considerando: Que de las actuaciones no resulta que los quejosos aparezcan como reos de algunos de los delitos á que se refiere el decreto citado, y que por lo mismo, el procedimiento del ciudadano Gefe Político de Tlaxiaco, ataca las garantías á que se refieren los artículos, 13, 21 y 23 de la Constitución federal, se decreta:

Que se confirma la sentencia pronunciada el día 4 del presente mes y año por el Juez de Distrito de Oaxaca, que declara en primer lugar: que la Justicia federal ampara á Jesus Saavedra, Manuel Gonzalez Herrera y Francisco Saavedra, contra la providencia dictada por el ciudadano Gefe Político de Tlaxiaco, que los condenó á muerte; y en segundo lugar, que se ponga á los reos á disposicion de su Juez competente, para los efectos á que hubiere lugar.

Devuélvase sus actuaciones al Juez de Distrito de Oaxaca, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron, por unanimidad de votos, los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados).—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogasan.*—*Juan J. de la Garza.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Marzo veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido por el ciudadano Antonio Escandon y Estrada, ante el Juzgado 1º de Distrito de México, contra el ciudadano Ministro de Hacienda, que le niega la devolucion de unas escrituras, propiedad de lquejoso.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que D. Antonio Escandon se presentó al Juzgado, interponiendo recurso de amparo contra la providencia del ciudadano Ministro de Hacienda, que mandó, no se devolvieran al quejoso los testimonios de unas escrituras que presentó á la seccion 6ª, para comprobar era acreedor al capital de siete mil seiscientos cuarenta y siete pesos, que le reconocian las casas número 24 de la primera calle de Mesones y 1 de los Gallos, y le habia cedido el Presbítero D. Guadalupe Rivas. Los fundamentos en que el Ministerio apoyó su resolucioin, fueron: que esas escrituras eran fraudulentas, por haberlas otorgado el Presbítero Rivas setenta y nueve dias despues que habian pasado las fincas al dominio de la Nacion. El punto en cuestion, se reduce á averiguar si el ciudadano Ministro de Hacienda, con su resolucioin, violó la garantía otorgada en el artículo 27 de la Constitución. Si el artículo se interpreta en un sentido literal, podría decirse, que no procedia el amparo; pero tomándolo en el sentido constitucional, es evidente que el acto reclamado debe restituirse por vía de amparo. Es un hecho que el ciudadano Escandon tenia un título, que si es nulo en la esencia, es bueno en la forma, y lo primero no podia declararse sino por la autoridad correspondiente. Si se hubiera hecho la devolucion de los testimonios sin declaracion, cabia el que el ciudadano Escandon negociara un crédito nulo; pero esto afectaria los intereses de particulares, é importa-